

«Con la extorsión ETA quería dinero y crear un cinturón de terror en torno al empresario»

KOLDO DOMÍNGUEZ



Un industrial amenazado y dos víctimas comparten en los cursos de verano de la Menéndez Pelayo el sufrimiento causado por el chantaje terrorista

SANTANDER. Euskadi. 3 de diciembre de 2008. El empresario Inazio Uribe ha sido asesinado al mediodía en Azpeitia y por la tarde una delegación de la patronal acude a la capilla ardiente. Recorre a pie unos cientos de metros entre el tanatorio y la parroquia local entre vecinos que miran desde la acera. «Fue la peor experiencia de mi vida. Jamás en mi vida me han insultado tanto. Los radicales nos insultaron y llamaron de todo».

Han pasado sólo diez años de aquella escena. Pero parece mucho más. Tanto, que las tres veces que ayer se reunieron en Santander para compartir sus experiencias como víctimas de ETA parecía que hablaban de algo muy lejano, en tiempo y lugar, a la Euskadi de hoy. Resultaba difícil de creer. Reunidos en el Palacio de la Magdalena, todo parecía irreal, casi imposible de creer. Pero ocurrió. Hace tan sólo unos años, cuando las cartas de extorsión, los secuestros y los disparos en la nuca formaban parte de un vergonzoso (y hoy incomprensible) día a día.

José Manuel Ayesa, expresidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, fue quien sufrió aquel ignominioso 'paseillo' por Azpeitia en 2008. Ayer lo conmemoró en una mesa redonda sobre la «experiencia de las víctimas» celebrada en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Como cada año, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación Víctimas del Terrorismo han organizado un simposio en este centro de Santander, en esta ocasión centrado en la financiación de las bandas armadas.

Junto a Ayesa estuvieron Joseba Abaitua, hijo del directivo de Michelin secuestrado por ETA en 1979, y Lourdes Legasa, sobrina del empresario José Legasa, asesinado un año antes al negarse a pagar el 'impuesto revolucionario' y acudir a la Policía. Fue el primero que se atrevió a hacerlo. «Mi tío quiso romper el muro de silencio y terror, y denunció que estaba siendo extorsionado. Yo no puedo pagar porque ese dinero serviría para asesinar a guar-

dias civiles», justificó. Y dos años después lo mataron. Siempre decía que era vasco y no le podían echar de su tierra», recordó ayer su sobrina. Ella, como sus dos compañeros de mesa y como la inmensa mayoría de víctimas, han marcado como su prioridad ganar la denominada 'batalla del relato', es decir, «transmitir a las próximas generaciones lo que de verdad sucedió aquí para evitar que vuelva a suceder». «Por eso estamos hoy aquí. No se sabe todo lo que ocurrió. Y hay que dejar claro que ETA nunca tuvo que existir. Sin justificaciones», coincidieron Joseba Abaitua y Lourdes Legasa.

El de los empresarios fue uno de los colectivos que más en silencio y soledad sufrió la violencia terrorista. Un buen día recibían una carta y su vida se desvanecía. Decenas de industriales pasaron por el despa-

cho de Ayesa –que llevó escolta 14 años– en busca de ayuda. «Sólo con ver su mirada de terror sabías que estaba siendo extorsionado. Les decíamos: 'te vamos a ayudar en todo, pero tienes que prometerme que no vas a pagar'», recordó ayer. «Y la inmensa mayoría aguantó y no lo hizo».

– **¿Y si pagaba?**

«Al que pagaba le ayudábamos, pero de manera distinta», reconoció ayer con media mueca de pesar.

Cuando ETA te señalaba, la recomendación era ocultarlo. «Siempre recomendábamos no decir nada a la familia. Con el 'impuesto revolucionario' ETA no sólo quería recaudar dinero, también crear un cinturón de terror en torno al empresario», explicó Ayesa. Llegaban más misivas, pero en vez de al empresario, a su mujer, a un primo, un amigo...

ETA esparcía el miedo y la amenaza.

Ante esa situación, los empresarios se sintieron, en su mayor parte, desamparados. La experiencia de la familia de Legasa fue la excepción. «A nosotros el pueblo de Irún sí nos apoyó. A mi padre le hirieron en el atentado y la gente se volcó con él. Y después del funeral de mi tío, hubo una manifestación de condena, la primera que se hizo», detalló ayer Lourdes Legasa.

Sensación de abandono

Pero el sentimiento común fue de abandono. Tras su secuestro –se prolongó durante diez días–, la familia de Joseba Abaitua se tuvo que marchar dos años a Brasil. ETA justificó la acción como una maniobra para forzar la negociación de un nuevo convenio en Michelin, y hubo algún miembro del comité de empresa que puso «palos en las ruedas» y no ayudó para lograr la liberación.

Arnaldo Ortegí fue condenado por aquel secuestro. El hijo de la víctima desveló ayer que el dirigente de la izquierda abertzale «aún nos adeuda a la familia» la indemnización recogida en la sentencia. «Le echo en cara eso, pero sobre todo la mofa cinica que empleó en un programa de televisión para referirse al caso de mi padre», aseguró.

El abandono también vino de

LAS FRASES

Lourdes Legasa

Sobrina industrial asesinado

«Hay que dejar claro que ETA nunca tuvo que existir. Sin justificaciones. El relato es muy importante»

José Manuel Ayesa

Expresidente patronal navarra

«Sólo con ver su mirada de terror sabías que ese empresario estaba siendo extorsionado»

Joseba Abaitua

Hijo de un directivo secuestrado

«Un miembro del comité de empresa puso palos en las ruedas y no facilitó su liberación»

parte de la clase política, y, en general, de toda la sociedad. «Si las cosas se quedan como están, la peor tortura será la falta de reparación. Aún quedan más de 300 crímenes sin resolver», lamentó Abaitua.



El moderador, Manuel Ventero, junto a Joseba Abaitua, Lourdes Legasa y José Manuel Ayesa, ayer en el Palacio de la Magdalena. :: MARÍA GIL

218 procedimientos de oficio para cobrar deudas a etarras

:: K. D.

SANTANDER. Florencio Domínguez fue el encargado de inaugurar ayer el curso de verano 'La financiación del terrorismo'. En su disertación, el director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria destacó la «importancia» de que a los condenados por terrorismo se les reclame el pago de la

responsabilidad civil a favor de las víctimas, una tarea que «se dejó de hacer por la dificultad de seguir la evolución financiera de los que han sido condenados». El experto reconoció que hace unas semanas se «ha reactivado» esta vía con el embargo de bienes a medio centenar de condenados. Aun así, Domínguez reconoció que es un procedimien-

to «complejo» porque por experiencias pasadas «se sabe» que los etarras, una vez cumplida la condena, «han recurrido a trabajar en negro, a no declarar sus ingresos para evitar que sean embargados y para eludir sus responsabilidades civiles, que forman parte de la condena».

La directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, también participante en el curso, concretó que en los últimos años el Gobierno central ha iniciado en los últimos años 281 procedimientos de oficio contra condenados por terrorismo que tienen

deudas con el Estado.

El director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo hizo hincapié además en que la «decadencia» de ETA «coincidió con una menor disponibilidad de medios económicos». «Eso aceleró su declive. Son dos fenómenos que van en paralelo y que se retroalimentan», apostilló. Además, recordó que a los miembros de ETA les falta reconocer ante la sociedad la «ilegitimidad» de su «actuación violenta». «Combatieron al Estado de Derecho durante décadas y tienen que hacer una autocrítica de su pasado», advirtió.